

¿Son imbéciles los ciudadanos de este país?

No es difícil llegar a esa conclusión observando el comportamiento de los partidos políticos que los tratan como a niños prometiendo que no harán lo que en cuanto llegan al poder hacen, engañando y mintiendo sobre lo que es obvio. El problema es que el observador no sabe bien a qué atenerse cuando estudia el comportamiento de los ciudadanos que han entrado en la lógica de «viva el Betis man que pierda», la lógica de los hinchas de los equipos de fútbol con relación a los partidos políticos. Da igual que el Betis o el Atlético sean buenos, malos o les tomen el pelo, ellos les seguirán hasta la muerte declarando enemigos a los seguidores de los equipos rivales. Esa misma lógica se ha instalado en una gran parte de los seguidores de los partidos políticos: da igual que nos engañen, que nos estafen, que sean corruptos o manifiestamente inmorales; son los nuestros y a los otros, sean como sean, hay que derrotarlos. Si a eso se añade la fundamentación y el estilo de los mensajes de los medios de comunicación, de sus numerosas tertulias formadas por expertos en todo que opinan “ex cathedra”, el convencimiento con que en las conversaciones cotidianas en bares y centros de trabajo se reafirman las gentes de la calle en las contradicciones más evidentes, la opinión del observador sobre el ciudadano no puede ser muy favorable. Falta formación, capacidad de análisis, y, explotando esas deficiencias, los medios y los políticos profesionales los utilizan. A partir de aquí surgen, enseguida, las reflexiones tendentes al fascismo: ¿Es posible una democracia con estas limitaciones en los votantes, con este grado de irresponsabilidad? ¿Tenemos que dar de nuevo la razón al hijo del primer dictador cuando afirmaba que los partidos políticos son intrínsecamente perversos?

No, no es culpa del ciudadano, a quien no le dejan otras alternativas, tampoco es un problema de la democracia, ni siquiera de los partidos políticos como institución. El problema es de una corrupción, inmoralidad e incompetencia monumental de la una gran parte de quienes se dedican a la política como profesionales, si no de todos porque la impunidad, incompetencia e irresponsabilidad con que unos actúan acaba corrompiendo a todos por asentimiento, consentimiento, omisión o no querer ver, especialmente cuando la mediocridad dominante impide que nadie pueda ponerla de manifiesto destacando sobre los demás. A eso colabora una gran parte de los medios de comunicación que se distingue por su inmoralidad, por el afán de manipular, por actitud servil al capitalismo dominante. Muy pocos medios quedan fuera de ese cenagal, lo que conlleva el ataque despiadado de los demás, hasta el punto de que no es aconsejable llevar en la mano determinados periódicos en determinadas lugares o instituciones.

Y ¿qué decir de las instituciones? Una Justicia de la que se puede decir cualquier cosa menos que es ciega o que es igual para todos, porque una parte no despreciable del poder judicial tiene una actitud militante con relación a los partidos políticos, y las principales magistraturas están divididas institucionalmente entre jueces propuestos por blancos o negros y, por tanto presumiblemente afines. Otras instituciones no están tan afectadas por la este problema, pero lo están por la mediocridad, por atavismos, corporativismos y problemas que hacen durísima la labor de quienes se esfuerzan por mejorar, pues se enfrentan a multitud de obstáculos para rebajar su esfuerzo de modo que no ponga en evidencia la mediocridad general.

Veamos algún ejemplo. Fueron los políticos en los parlamentos y gobiernos autónomos, en los ayuntamientos o en el Gobierno de España quienes decidieron inversiones irresponsables, cuyo objetivo no era otro que el prestigio de quien lo propuso o su interés en ganar votos, quienes contrajeron deudas, quienes establecieron normas que engendraron el embrión de la crisis, o le dejaron crecer omitiendo la vigilancia debida. Sin embargo, a la hora de responder de todo ello, resulta que deben responder los ciudadanos o los funcionarios, pero nunca los políticos que se limitan a meros gestos simbólicos confiando en que la imbecilidad que suponen en el ciudadano les hará creer que también ellos hacen sacrificios suprimiendo la cena de Navidad, eliminando varios coches viejos o despidiendo los cargos ocupados con gentes del otro partido. ¿Por qué no se retiene el dinero que el estado aporta a los partidos políticos? Es una cantidad más que suficiente para evitar recortes importantes en sanidad u otros elementos del estado de bienestar. ¿Por qué no se les retiran las dietas o gastos adicionales, o los llamados sobresueldos? ¿Por qué no se suspende el Senado, que no sirve mas que para colocar adictos, hasta que este resuelta la crisis? ¿Por qué no se suspenden igualmente los parlamentos y gobiernos autonómicos durante algunos años? La atención a las cuestiones de trámite y decisiones obligadas pueden atender por los funcionarios que, de hecho, son quienes resuelven normalmente todo ello. Y con esa decisión se evitarían muchas ideas geniales y tentaciones inversoras o generadoras de votos, de manera que el ahorro directo o indirecto sería importante. ¿por qué no se acaba con los innumerables asesores y empresas públicas cuya utilidad solamente es dar empleo a los adictos?

Pues, no. Nada de eso se hará. Los políticos son contrarios a semejantes planteamientos y argumentarán todo genero de problemas y acusaciones para impedirlos. Al contrario nos comentarán que el sueldo de los políticos es de los más bajos de Europa, como si el de los obreros o el de los funcionarios se encontrara entre los más altos. Y con esa desvergonzada justificación, intentarán cobrar un sobresueldo en dietas o en compensación “en diferido”, añadir el de otra institución o se subirán los emolumentos, esperando que pase desapercibido. Más aún, en plena crisis, el Estado regala a cada parlamentario juguetes tecnológicos, seguros de vida y otros beneficios que suponen más de 2000 € per cápita, una simple multiplicación permite saber cuantas pensiones deben congelarse para asegurar ese beneficio.

¿Es que quieren provocar una revolución? ¿Es que quieren probar hasta donde es capaz de tolerar la ciudadanía? ¿Es que creen que sencillamente dejándose arrastrar y diciendo que ellos sufren mucho aplicando medidas tan graves al ciudadano que dan exentos de responsabilidad? Deben efectivamente confiar en que los ciudadanos son completamente imbéciles, en lógico equilibrio con su mediocridad, pues siguen negando la evidencia, engañándonos como a niños, mediatizando a la Justicia, sintiendose impunes y convencidos de como solamente una revolución les echara del poder donde se alternan en acuerdo tácito, revolución que a causa de la imbecilidad que les suponen, la pasividad o la connivencia de los ciudadanos nunca se hará.